

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 351
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2021-00218-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JUAN CARLOS MONROY MONTOYA
DEMANDADA: LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA
NACIONAL-DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
SOCIALES
ASUNTO: Rechazo demanda por caducidad de la acción

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El señor Juan Carlos Monroy Montoya, a través de apoderada especial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra La Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional-Dirección de Prestaciones Sociales, con el fin de que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 193 del 9 de enero de 2020, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago a su favor del auxilio de cesantía definitiva y se le declaró deudor del tesoro, con fundamento en el expediente No. 4-91448671 de 2019.

Examinados minuciosamente el libelo introductorio y sus anexos, se advierte que en este caso operó la caducidad de la acción, por lo que se impone el rechazo de la demanda y la devolución de los anexos a la parte demandante sin necesidad de desglose.

En efecto, el artículo 164, numeral 2, literal d), del CPACA, consagra que cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones previstas en otras disposiciones legales.

Una de tales excepciones figura precisamente en el numeral 1º de dicho precepto legal, al prever que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, circunstancia que no ocurre en el presente asunto, por lo que el computo del término de caducidad debe regirse por la regla general.

Sobre este tópico, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. César Palomino Cortés, en providencia del 3 de junio de 2021, dentro del proceso No. 25000-23-42-000-2017-00602-01, expuso:

“En asuntos relativos a las cesantías definitivas, esta Sala ha señalado que, al haberse terminado el vínculo laboral con la entidad demandada, las reclamaciones sobre esa prestación de ninguna manera revisten el carácter de periódico y bajo ese entendido, debía observarse para la presentación del medio de control el término de 4 meses, al tratarse claramente de cesantías definitivas.

*De conformidad con los anteriores argumentos, se concluye que cuando el asunto que se plantea ante la jurisdicción esté relacionado con las cesantías en vigencia de la relación laboral, esta prestación tiene la naturaleza de periódica; **contrario sensu, si ha finalizado el vínculo, adquiere la naturaleza de unitaria**, lo que se traduce en que su reclamación por*

vía judicial no puede presentarse en cualquier tiempo, sino en atención al término previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA”.

Ahora bien, como se señaló en líneas atrás, la parte actora pretende la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución No. 193 del 9 de enero de 2020, por medio de la cual se le reconoció y ordenó el pago de sus cesantías definitivas y, a título de restablecimiento del derecho, reajustar dicha prestación social aplicando el régimen de retroactividad, esto es, pagando un (1) mes de salario por cada año de servicio o de manera proporcional, teniendo en cuenta lo devengado en el último año, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6ª de 1945 (artículo 17, literal a), la Ley 65 de 1946 (artículo 1) y el Decreto 1160 de 1947 (artículo 6), de modo que la acción se encuentra sometida al término de caducidad de cuatro (4) meses contenido en el literal d), numeral 2, del artículo 164 del CPACA.

Debe advertirse que la Ley 640 de 2001 contempló la suspensión de los términos de caducidad y prescripción hasta tanto se surte la conciliación extrajudicial. Veamos:

“ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

A su turno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, en cuyo artículo 9 dispuso:

“Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. En la radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta en la que certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias, según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para aprobación a la autoridad judicial competente.

El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración de las circunstancias específicas de salubridad y capacidad institucional podrá suspender la radicación y/o el trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, así como de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo adelantada por los agentes del Ministerio Público.

En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no corre el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios de control, respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes.

Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad convocada, el Comité de Conciliación contará con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión.

Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo”.

Por su parte, Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 564 de 2020 y decretó la suspensión de los términos de prescripción y caducidad, en las siguientes condiciones:

“Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente (...).”

Como puede colegirse, a partir del **16 de marzo de 2020** se suspendió el término de caducidad para promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se reanudó el **1 de julio de 2020**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo PCSJA20-11567 expedido el 5 de junio de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual *“Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo”*.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto se advierte que el acto administrativo, cuya nulidad se deprecia en el presente proceso, fue notificado al actor a través de correo electrónico el **9 de enero de 2020**, a las 3:38 p.m., como se evidencia en el mensaje de datos obrante en el archivo *“16.AnexoRespuestaArmada.pdf”* del expediente digital.

En esa medida, se tomará el 10 de enero de 2020 como punto de partida para contabilizar el término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en la ley para promover el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, pues fue el día siguiente a aquel en que materialmente se notificó la Resolución No. 193 del 9 de enero de 2020, de modo que entre el 10 de enero de 2020 y el 15 de marzo de 2020 transcurrieron los primeros dos (2) meses y cinco (5) días del plazo de caducidad, restando un (1) mes y veinticinco (25) para su consumación y, como dicho lapso se reanudó el 1° de julio de 2020, la parte actora contaba, en principio, hasta el 25 de agosto de 2020 para radicar la respectiva demanda.

No obstante, el 25 de junio de 2020 el actor radicó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público, es decir, antes de que se reanudaran los términos judiciales, con lo cual no varió el faltante de un (1) mes y veinticinco (25) días para que operara la caducidad, y como por mandato legal debe descontarse el tiempo que demandó el trámite conciliatorio, esto es, el período comprendido entre el 25 de junio de 2020 y el 25 de noviembre de 2020, toda vez que no puede superar el plazo de cinco (5) meses a que se refiere el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 2020, es claro que debió promoverse presente medio de control a más tardar el 19 de enero de 2021, pero como lo hizo hasta el 23 de julio de 2021, como consta en el acta de reparto que obra en el archivo *“05.ActaRepartopdf”* del expediente digital, es innegable que de lejos precluyó el lapso de cuatro (4) meses consagrado en el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. César Palomino Cortés en providencia del 30 de octubre de 2020, proferida dentro del proceso No. 52001-23-33-000-2018-00185-01, señaló:

“Entonces, la suspensión del término de la caducidad se produce cuando la solicitud de conciliación se presenta ante el ente conciliador y hasta cuando se logre un acuerdo conciliatorio, se expidan las constancias de que trata el artículo 2° de la Ley 640 de 2001 o se venzan los tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero.

Aclarado lo anterior, se observa que en el presente asunto no se logró acuerdo conciliatorio y la constancia de no conciliación fue expedida pasados los 3 meses otorgados en la norma, de forma que la caducidad estuvo interrumpida desde el 20 de diciembre de 2017 y hasta el 20 de marzo de 2018” (Negrita ajena al texto original).

Así las cosas, se reitera, debe darse aplicación a lo consagrado en el numeral 1 del artículo 169 del CPACA, esto es, el rechazo de la demanda por operar la caducidad de la acción y ordenar la devolución de los anexos al interesado, sin necesidad de desglose.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda por caducidad de la acción.

SEGUNDO: DEVOLVER a la parte actora los anexos del libelo, sin necesidad de desglose.

TERCERO: RECONOCER a la Dra. Gloria Tatiana Losada Paredes, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.436.392 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 217976 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada especial de la parte actora, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante a folios 1 a 2 del archivo “03.Anexos.pdf” del expediente digital.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

CHR

Firmado Por:

Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

788cacce25ae44575377e13200927df08aab7209394f225b06cc409379bb5409

Documento generado en 26/05/2022 04:08:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>